

Rancagua, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparecen los abogados Leonardo Battaglia Castro y Rodrigo Ávila Oliver, en favor y en representación de don **Agustín Andrés Rosas Parada**, quienes interponen recurso de amparo en contra de la resolución pronunciada por la SEGUNDA Sala de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Talca, integrada por el Ministro Titular Sr. Hernán Fernando González García, el Fiscal Judicial Sr. Óscar Santiago Lorca Ferraro, y el Abogado Integrante Sr. Rodrigo Eduardo De la Vega Parra, quienes en Apelación Rol Ingreso Corte: Penal-1386-2024, por unanimidad, resolvieron confirmar la resolución apelada de 18 de julio de 2024, dictada por el Juzgado de Garantía de Curicó, que mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el amparado, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Indica que su defendido se encuentra privado de libertad desde el 27 de diciembre del año 2023, fecha en la que fue formalizado como autor del delito de manejo en estado ebriedad, causando muerte, previsto y sancionado en el art. 196 Inc. 3° de la Ley N°18.290, en causa RUC N° 2301419472-K, RIT N°6372-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Curicó.

Refiere que, al existir nuevos antecedentes, y considerando, el tiempo transcurrido, el 18 de julio del 2024 tuvo lugar audiencia para debatir la modificación



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WKZJXPQTJQ

de la medida de prisión preventiva, ordenando el tribunal mantenerla, considerando que no existían antecedentes nuevos que hicieran variar las circunstancias que se tuvieron presentes al momento de decretarla.

Señala que su parte dedujo recurso de apelación en contra de dicha resolución, que recibió el Ingreso Rol de Ingreso Corte N° Penal-1386-2024 de la Il. Corte de Apelaciones de Talca, en la que, con fecha 25 de julio de 2024, luego de las discusiones de rigor, se decidió mantener la medida cautelar personal de prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, no acogiendo su solicitud de modificarla por las medidas cautelares personales de arraigo nacional, y arresto domiciliario total.

Transcribe la resolución recurrida y expresa que el argumento para disponer la mantención de la prisión preventiva del Sr. Rosas Parada está sustentado en el hecho de que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, en atención a la naturaleza del delito y la pena asociada al mismo. Alega que se incurre en un grave error, ya que no existen elementos que permitan sostener este eventual peligro para la seguridad de la sociedad. Así, sostiene que el efectuar un examen de responsabilidad anticipada, en el cual se presume que su representado es peligroso para la sociedad sin tener aún una condena, sólo en base al delito por el cual está formalizado y la pena asociada, deriva en



una proyección de culpabilidad, lo que es contrario al derecho de presunción de inocencia y constituye una pena anticipada.

Se refiere a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad y el derecho de su representado a ser juzgado en un plazo razonable.

Cita nutrida normativa y jurisprudencia tanto nacional como internacional en la materia y alega que, en la especie, no se ha señalado de manera expresa, cuál sería la peligrosidad concreta del imputado, a través de un fundamento razonado, concluyendo su supuesta peligrosidad, a partir de la pena que arriesgaría en caso de condena.

Agrega que no sólo se ha impuesto esta medida cautelar como pena anticipada en razón de la falta de fundamento más allá de la pena asociada al delito, sino que, además, no se cumple con ninguno de los dos criterios tenidos en consideración para concebir que existe un peligro para la seguridad de la sociedad.

Destaca los antecedentes personales del amparado, los que constan en informe social, cartas de buena conducta y recomendación, antecedentes académicos, red de apoyo familiar, etc., los que se han visto reforzados con otro nuevo esgrimido en audiencia, allegado a la investigación a través de correo electrónico del 10 de julio, consistente en un Informe de Gendarmería, suscrito por el Alcaide del Centro Penitenciario de Curicó, que da cuenta del



excelente comportamiento de su defendido en dicho establecimiento penal.

En cuanto al delito por el cual fue formalizado, manifiesta que el sólo hecho de la naturaleza del delito en sí mismo no es criterio suficiente para sustentar por sí mismo la prisión preventiva. En cuanto a la pena asociada al delito que se le imputa señala que, en caso de ser condenado, su defendido caería dentro del rango previsto en el art. 196 bis N°2 de la Ley N°18.290, esto es, que al favorecerlo la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal y ninguna agravante, sería condenado, eventualmente, a una pena de simple delito, la de presidio menor en su grado máximo, por lo que podría optar a una pena sustitutiva de aquellas dispuestas en la Ley N° 18.216.

Puntualiza que, sin perjuicio de lo anterior, la norma estima que, en caso de reconocérsele responsabilidad en el delito que se le imputa, este debería cumplir 1 año privado de libertad, por lo que al llevar su representado más de 7 meses privado de libertad por una eventual penal a la que podría verse expuesto, resulta relevante señalar que ya se ha cumplido más de la mitad de la pena privativa de libertad.

En este sentido, considera que el acto procesal por el cual se dispone la prisión preventiva del amparado carece de toda legalidad, al ponderar equivocadamente los antecedentes esgrimidos, en especial por el Ministerio Público, para establecer adecuadamente cuales serían las medidas cautelares



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WKZJXPQTJQ

proporcionales para asegurar los fines del procedimiento, dando así por satisfecha la necesidad de cautela en los términos previstos en el art. 140 letra c) del Código Procesal Penal.

Concluye señalando que, en el caso de autos, la acción de Amparo aparece como la única forma para reestablecer el imperio del derecho, y solicita se deje sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra del amparado.

A folio 3, con fecha 27 de agosto de 2024, informan don Hernán Gonzalez García, Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, don Óscar Lorca Ferraro, Fiscal Judicial y don Rodrigo de la Vega Parra, Abogado Integrante.

Indican que sin perjuicio de contar con la convicción que la acción constitucional de amparo no procede contra resoluciones pronunciadas por las Cortes de Apelaciones, por resolución de 25 de julio del presente año, dictada por los suscritos en la causa penal Rol N° 1386-2024, se confirmó la resolución apelada de 18 de julio último del Juzgado de Garantía de Curicó, que mantuvo la prisión preventiva del amparado, quien se encuentra formalizado como autor del delito de conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad causando la muerte de una persona.

Refieren que dicha decisión se funda en los antecedentes de la causa y en lo prevenido, ante todo por el artículo 140 del Código Procesal Penal, toda vez que, por la naturaleza del delito, las circunstancias de



su comisión y la pena asignada al mismo, la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Precisan que, al contrario de lo señalado por el recurrente, la "gravedad de la pena asignada al delito" sí es un motivo que permite determinar el peligro para la seguridad de la sociedad.

Concluyen que lo resuelto se ajusta a lo indicado en tal precepto y, asimismo, a lo contemplado por el artículo 19 N° 7 letra e) de la Carta Fundamental y que el presente recurso no cabe en la especie, porque la decisión de esta Corte se aviene plenamente con la referida regulación constitucional y legal y que, admitir lo impetrado en este caso, significaría, abrir una tercera instancia, proscrita por el ordenamiento jurídico.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de amparo, es aquel remedio de rango constitucional, que tiene por objeto la protección del derecho a la libertad personal y la seguridad individual, de tal forma que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.



SEGUNDO: Que, el núcleo del problema planteado dice relación con la discrepancia jurídica que mantiene la defensa, en relación con la decisión de la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, de 25 de julio de 2024, que confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Curicó, en orden a mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto del amparado, con fecha 18 de julio de 2024, por considerar que dicha decisión es arbitraria al no estar debidamente fundada.

TERCERO: Que, para resolver la cuestión planteada por la recurrente, se ha de considerar que el sistema de revisión de las decisiones judiciales ha establecido para el caso sub lite, el de la doble instancia, en el cual la competencia inicial corresponde, en este caso, al juzgado de garantía y con posterioridad, a la Corte de Apelaciones, por la vía del medio de impugnación pertinente.

En este sentido, el debido proceso se encuentra regulado en el Código Procesal Penal, cuerpo legal, que, en el Libro Tercero, Título III, artículos 364 y siguientes consagra el recurso de apelación como remedio válido para situaciones como la expuesta, reglas que fueron rigurosamente cumplidas desde que su asunto fue resuelto en primera instancia y elevado a segunda, donde jueces competentes decidieron el medio de impugnación ya referido.

CUARTO: Que, además, cabe precisar que lo reprochado en la presente acción de amparo, es una resolución judicial dictada por una de las salas de la



ltima. Corte de Apelaciones de Talca, la que fue pronunciada conociendo, en audiencia, de un recurso de apelación y acorde a las normas pertinentes establecidas al efecto en el Código Procesal Penal.

De este modo, la discusión jurídica se agotó en la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Talca con fecha 25 de julio de 2024 que confirmó a su vez, la resolución dictada por el juzgado de Garantía de Curicó. Entenderlo de otra forma, significa derechamente estimar que el recurso de amparo puede constituir una tercera instancia de revisión, cuestión del todo improcedente, no existiendo acto arbitrario o ilegal alguno reparable por esta vía.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo anterior, del tenor del recurso deducido no se advierte que la pretendida vulneración de la libertad personal y seguridad individual del amparado sea consecuencia de una actuación ilegal y/o arbitraria de los recurridos, o que exista una perturbación a la libertad personal del recurrente con infracción de lo prevenido en la Constitución o en las leyes, pues la resolución que motiva el presente arbitrio no sólo ha sido dictada por órgano competente, dentro de la esfera de sus facultades legales y con las formalidades atinentes al caso, sino que, además, se encuentra debidamente fundada, por cuanto ella da cumplimiento a la exigencia del artículo 36 del Código Procesal Penal, desde que expresa "sucintamente, pero con precisión, los motivos de



hecho y de derecho en que se basaron las decisiones tomadas", tal como lo exige la norma precitada.

SEXTO: Que, en tal contexto, como se dijo, el recurso de amparo es una acción constitucional que procede cuando se pretende restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida afectación del afectado en los casos que este haya sido arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución y las leyes y, no cuando no se comparta la justificación entregada por los juzgadores para fundar su decisión.

Por los motivos expuestos, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **SE RECHAZA**, la acción de amparo interpuesta en favor de **Agustín Andrés Rosas Parada**.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 477-2024.- amparo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WKZJXPQTJQ

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Michel Anthony Gonzalez C., Barbara Quintana L. y Abogado Integrante Marco Antonio Arellano Q. Rancagua, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro.

En Rancagua, a veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WKZJXPQTJQ